



SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, diez (10) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

Demandante: JULIO LEÓN VALENCIA HERNÁNDEZ
Demandados: ACP COLPENSIONES, PROTECCIÓN S.A Y COLFONDOS S.A.
Radicado: 05001 31 05 011 2022 00397 01
Sentencia: S-314

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

En la fecha indicada, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, integrada por los Magistrados JOHN JAIRO ACOSTA PÉREZ quien obra en este acto en calidad de ponente, FRANCISCO ARANGO TORRES y JAIME ALBERTO ARISTIZÁBAL GÓMEZ, procede a resolver el **recurso de apelación** interpuesto por **COLFONDOS S.A.** y en grado jurisdiccional de **Consulta a favor de Colpensiones**, con motivo de la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Once Laboral del Circuito de Medellín el día 3 de agosto de 2023.

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, la presente decisión se profiere mediante sentencia escrita, aprobada previamente por los integrantes de la Sala.

PRETENSIONES:

JULIO LEÓN VALENCIA HERNÁNDEZ demandó a PROTECCIÓN S.A., COLFONDOS S.A. y COLPENSIONES, pretendiendo se declare la nulidad del traslado efectuado al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad -RAIS- administrado por PROTECCIÓN S.A., al igual que los traslados

horizontales, teniéndolo como afiliado sin solución de continuidad al Régimen de Prima Media -RPM-.

Como consecuencia de lo anterior, solicita que se condene a COLFONDOS a devolver a COLPENSIONES todas las cotizaciones y rendimientos. Pretende, además, las costas procesales.

LOS HECHOS:

Expone como fundamento de sus peticiones que nació el 26 de marzo de 1955, que cuenta con 1.325 semanas, que se encuentra cotizando desde el año 1979 inicialmente en el RPM y que a la fecha de entrada en vigencia de la ley 100 de 1993 contaba con 15 años de servicio y 39 años de edad. Sostiene que cuando estaba laborando en el municipio de la Pintada le solicitaron afiliarse a DAVIVIR S.A. - hoy PROTECCIÓN S.A. - firmando tan solo el formulario de afiliación sin ninguna asesoría al respecto, e igual cosa sucedió en el año 2001 con la AFP COLFONDOS S.A.; que nunca se le informó sobre la restricción legal, ni de cómo se calculaba su pensión. Que solicitó el traslado de régimen a COLPENSIONES, el cual fue negado, y que solicitó a PROTECCIÓN S.A. información y aclaración de incógnitas sobre su traslado al igual que lo hizo con COLFONDOS, pero solo fue respondido por PROTECCIÓN S.A.

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA:

Al contestar, COLPENSIONES admite la fecha de nacimiento, la afiliación al ISS, el traslado realizado y la solicitud elevada a este fondo público; que no le consta la información entregada por los fondos privados. Se opuso a las pretensiones formuladas en su contra. Excepcionó existencia de aspectos legales y financieros que impiden el retorno del demandante al RPMPD, buena fe, falta de legitimación en la causa por pasiva, prescripción y/o caducidad de la acción, imposibilidad de condena en costas y condena en costas en contra del demandante.

PROTECCIÓN S.A. en la contestación indica que es cierta la fecha de nacimiento; que no le consta su afiliación al ISS ni los requisitos reunidos a la vigencia de la ley 100 de 1993; que no es cierto que al actor no se le brindó una correcta asesoría, ya que se efectuó a través del promotor de Protección una asesoría integral, clara, comprensible y objetiva sobre el RAIS, resaltando sus características principales y diferenciadoras, indicándole que el monto de su prestación económica sería variable al depender del monto de los aportes ahorrados a lo largo de su vida laboral y los rendimientos financieros que generaban los mismos, además de sus aportes voluntarios, sus beneficiarios, la existencia o no de un bono pensional y la regulación de la Superintendencia Financiera y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para liquidar la mesada pensional, realizándose comparativos generales entre uno y otro régimen, señalándole a su vez, que el RAIS es completamente diferente y excluyente respecto al RPM. No le consta la información entregada por COLFONDOS S.A. Se opuso a las pretensiones y como excepciones propuso inexistencia de la obligación y falta de causa para pedir, buena fe, prescripción, aprovechamiento indebido de los recursos públicos y Sistema General de Pensiones, reconocimiento de restituciones mutuas a favor de la AFP, inexistencia de la obligación de devolver la comisión de administración y la prima de seguro previsional cuando se declare la nulidad y/o ineficacia de la afiliación por falta de causa, aplicación del precedente sobre los actos de relacionamiento al caso concreto, y traslado de aportes a otras administradora de fondo de pensiones.

COLFONDOS S.A. indicó en su contestación que no le consta la fecha de nacimiento ni la afiliación al ISS; tampoco los hechos que van dirigidos en contra de terceros; que el traslado efectuado a esta entidad, obedeció a que se le brindó una asesoría integral y completa sobre el régimen general de pensiones, examinando el actor los beneficios y desventajas de los diferentes regímenes o administradoras, y que es cierta la solicitud elevada a esta entidad, ateniéndose a los contenidos en la comunicación entregada. Se opuso

a todas las pretensiones. Y como excepciones planteo inexistencia de la obligación, falta de legitimación en la causa por pasiva, buena fe, ausencia de vicios del consentimiento, validez de la afiliación en el RAIS, ratificación de la afiliación del actor al fondo de pensiones obligatorias administrado por COLFONDOS S.A., prescripción de la acción para solicitar la nulidad del traslado, compensación y pago.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA:

Mediante sentencia del 3 de agosto de 2023, el Juzgado Once Laboral del Circuito de Medellín, **DECLARÓ** la ineficacia del traslado del demandante del Régimen de Prima Media al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad en las AFP PROTECCIÓN S.A. y COLFONDOS S.A.; **CONDENÓ** a COLFONDOS S.A. y a PROTECCIÓN a trasladar a COLPENSIONES las sumas que se encuentren en la cuenta de ahorro individual del actor, junto con los bonos pensionales si hay lugar, las sumas de las aseguradoras, rendimientos, intereses, gastos de administración, comisiones, primas de seguros previsionales, y el porcentaje destinado al fondo de garantía de pensión mínima, los cuales deben ser indexados; **ORDENÓ** a COLPENSIONES a recibir las sumas ordenadas a trasladar, y activar la afiliación del demandante en el Régimen de Prima Media, en forma permanente y sin solución de continuidad; y **CONDENÓ** en costas a COLFONDOS S.A. y a PROTECCIÓN S.A.

DEL RECURSO DE APELACIÓN:

Interpuesto por la apoderada de COLFONDOS S.A., solicita que no se trasladen a COLPENSIONES los conceptos relativos a los gastos de administración, el seguro previsional y el porcentaje destinado para fondo de garantía de pensión mínima indexados, ya que el descuento de estos conceptos fue consecuencia de una disposición legal, válida, exigible y vigente, generándose rendimientos superiores a los que se hubiesen generado en el RPM; que por ser conceptos de tracto

sucesivos debe operar la prescripción; que las cuotas de administración no pueden devolverse, pues no se pueden desconocer los efectos jurídicos que produjo, los cuales son válidos al día de hoy; que ésta administradora cumplió con el deber de administrar correctamente los dineros del demandante y gracias a su optima gestión se generaron unos rendimientos financieros en la cuenta de ahorro individual, y si se ordena el traslado de los rendimientos, no debió ordenarse el traslado de los gastos de administración, pues es por la gestión del fondo que se generaron los rendimientos, los cuales, al ser comparados con los gastos o cuotas de administración, estos últimos son una suma muy inferior a los rendimientos. Que los seguros previsionales ya fueron sufragados a las Aseguradoras, las cuales cumplieron con su deber contractual de mantener la cobertura, y de devolverse se debió vincular a las aseguradoras; y que tampoco deben ser devueltos estos conceptos de manera indexada, pues se están devolviendo los rendimientos y esto sería un enriquecimiento sin justa causa a favor de COLPENSIONES.

De igual forma, la sentencia será conocida en grado jurisdiccional de CONSULTA en favor de COLPENSIONES.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN:

Dentro del término del trasladado concedido a las partes, el demandante presentó alegatos de conclusión en los cuales solicita que se confirme la sentencia de primera instancia, conforme al principio de favorabilidad; que se debe acogerla línea de la Corte Suprema de Justicia y no los salvamentos de voto; que debe entenderse la diferencia entre Precedente Judicial y Doctrina Probable; que los traslados horizontales no convalidan el deber de información y que los Fondos Privados de Pensiones no pudieron probar que hayan suministrado la información al momento del traslado de régimen de pensiones y tampoco antes de que el actor cumpliera 52 años de edad.

De igual forma, la apoderada de COLPENSIONES presentó alegatos, solicitando no se acoja la sentencia de primera instancia, pues se hace imposible el traslado de régimen conforme al artículo 2 de la Ley 797 de 2003, por estar el actor dentro de la prohibición legal; que el suministro de información que se le impone a PROTECCIÓN S.A. es una carga probatoria desproporcional, por lo que solicita se tenga en cuenta la norma aplicable al momento de la afiliación; que COLPENSIONES es un tercero ajeno al contrato celebrado entre el demandante y PROTECCIÓN S.A., por lo que no se le debe condenar; y que en el evento en que se reconozcan las pretensiones del demandante, se debe entregar el total de los valores cotizados en la cuenta de ahorro individual con su indexación.

CONSIDERACIONES:

Se procede a desatar el recurso de apelación interpuesto por COLFONDOS S.A. en contra de la sentencia de primera instancia, e igualmente conocer del proceso vía grado jurisdiccional de CONSULTA en favor de COLPENSIONES conforme a lo dispuesto en el inciso 3º del artículo 14 de la Ley 1149 de 2007.

Entre los hechos que a esta altura del proceso han quedado plenamente acreditados, se tiene que: **i)** el señor JULIO LEÓN VALENCIA HERNÁNDEZ nació el 26 de marzo de 1955; **ii)** se afilió por primera vez al sistema pensional ante el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, cotizando allí desde el 06 de diciembre de 1976¹; **iii)** que el 20 de febrero de 1999², se trasladó a DAVIVIR hoy PROTECCIÓN S.A.; iv) y que el 10 de octubre de 2001³, se trasladó con COLFONDOS S.A. entidad en la que se encuentra actualmente afiliado.

Ahora bien. La diferencia jurídica que se plantea en este caso, consistente en la pretensión de la parte actora en punto que se declare

¹ Folios 373 a 375 de la contestación de COLPENSIONES

² Folio 31 de contestación de PROTECCIÓN S.A.

³ Folio 22 de la contestación de COLFONDOS S.A.

ineficaz el traslado que efectuó desde el Fondo público y común administrado por el ISS, al Fondo privado de ahorro individual, fundada en una insuficiente información por parte de esta última entidad en cuanto a las consecuencias reales de dicha determinación, ha sido materia de múltiples decisiones judiciales orientadas desde la cúspide de la jurisdicción ordinaria laboral.

Si bien es cierto, en principio, tal traslado se hizo como producto de un concurso de voluntades entre personas plenamente capaces, no lo es menos que se presentaba una relación asimétrica en el sentido de que los Fondos privados como agentes del sector financiero de la economía, tenían, desde su creación, el deber legal de suministrarle al afiliado una explicación completa pero concreta, hecha a la medida de la situación particular del interesado, de la consecuencias del traslado y con la esencial finalidad de que este pudiese tomar una decisión informada sobre un aspecto ligado a su proyecto de vida futura.

En efecto, desde la expedición del decreto 663 de 1993⁴, o Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, el que en su Capítulo VIII incluye a las Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, dispuso dicha obligación en los siguientes términos:

*“Art 97. **Información a los usuarios.** Las entidades vigiladas deben suministrar a los usuarios de los servicios que prestan, la información necesaria para lograr la mayor transparencia en las operaciones que realicen, de suerte que les permita, a través de elementos de juicio claro y objetivo, escoger las mejores opciones del mercado.*

Por su parte, la Ley 100 de 1993 también intervino el punto, pues en su artículo 271 estableció:

*“Art. 271. **Sanciones para el Empleador.** El empleador, y en general cualquier persona natural o jurídica que impida o atente en*

⁴ Norma posteriormente actualizada por la ley 795 de 2003 “*ley por la cual se ajustan algunas normas del Estatuto Orgánico Financiero*”

cualquier forma contra el derecho del trabajador a su afiliación y selección de organismos e instituciones del Sistema de Seguridad Social Integral, se hará acreedor en cada caso y por cada afiliado a una multa, impuesta por las autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, o del Ministerio de Salud en cada caso, que no podrá ser inferior a un salario mínimo mensual vigente ni exceder 50 veces dicho salario. El valor de estas multas se destinará al Fondo de Solidaridad Pensional o a la subcuenta de solidaridad del Fondo de Solidaridad y Garantía del Sistema General de Seguridad Social en Salud, respectivamente. La afiliación respectiva quedará sin efecto y podrá realizarse nuevamente en forma libre y espontánea por parte del trabajador."

Así mismo, importa señalar al respecto, que la jurisprudencia laboral ha sido consistente, reiterada, pacífica y uniforme desde el año 2008, en señalar que el deber de información a cargo de las administradoras de fondos de pensiones, es un deber exigible desde su creación, advirtiendo, además, que en este tipo de casos la carga de la prueba recae sobre los fondos privados, especialmente por plantearse una afirmación indefinida como lo es el hecho que la persona afiliada no ha recibido la suficiente información, lo que solo puede ser desvirtuado con la prueba positiva por la cual se acredite que tal obligación sí se cumplió.

Tesis que se introdujo desde las sentencias 31.989 y 31.314, ambas del 9 de septiembre de 2008, por cuenta de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, cuyas consideraciones se han venido renovando y reiterando con el transcurso de los años a través de múltiples pronunciamientos. Cabe destacar lo que se dijo en aquellas primeras providencias, así, en la Rad. N° 31.989 de 2008:

"Las administradoras de pensiones tienen el deber de proporcionar a sus interesados una información completa y comprensible, a la medida de la asimetría que se ha de salvar entre un administrador experto y un afiliado lego, en materias de alta complejidad. Es una información que se ha de proporcionar con la prudencia de quien sabe que ella tiene el valor y el alcance de orientar al potencial afiliado o a quien ya lo está, y que cuando se trata de asuntos de consecuencias mayúsculas y vitales, como en el sub lite, la elección del régimen pensional, trasciende el simple deber de información, y como emanación del mismo reglamento de la seguridad social, la

administradora tiene el deber del buen consejo, que la compromete a un ejercicio más activo al proporcionar la información, de ilustración suficiente dando a conocer las diferentes alternativas, con sus beneficios e inconvenientes, y aún a llegar, si ese fuere el caso, a desanimar al interesado de tomar una opción que claramente le perjudica."

Del desarrollo jurisprudencial posterior se evidencian algunos ejes claves para la declaratoria de la ineficacia del traslado y que se resumen en lo siguiente:

- (i) El juez debe constatar el deber de información como un elemento ineludible de la ineficacia del acto jurídico;
- (ii) El simple consentimiento vertido en el formulario de afiliación, es insuficiente, pues ello no demuestra por sí solo que se hubiere brindado una información idónea, y se requiere en todo caso la prueba del consentimiento informado;
- (iii) Le incumbe a la respectiva AFP del RAIS, por inversión de la carga de la prueba, demostrar que en el momento del traslado le suministró al afiliado (a) la información suficiente y completa sobre las consecuencias de tal decisión, en los términos del artículo 1604 del Código Civil, según el cual, la prueba de la diligencia y cuidado incumbe a quien debió emplearlo; y
- (iv) No es necesario ser beneficiario del régimen de transición o estar próximo a causar el derecho para que se produzca la ineficacia del traslado.

En el presente caso, no se observan pruebas fehacientes que permitan tener por acreditado que el fondo privado brindó, en el momento del traslado, una información integral de las condiciones subjetivas del afiliado, con explicación de las ventajas y desventajas de la reubicación entre regímenes y su incidencia en su caso particular, de tal manera que aquel pudiera tener un panorama claro de sus futuras expectativas.

Esto es, el Fondo privado incumplió su deber de información, al no suministrar, de modo claro y preciso, las características, consecuencias y efectos del cambio de régimen.

Del interrogatorio de parte absuelto por el actor, no se vislumbra confesión alguna respecto del cumplimiento a ese deber de información, manifiesta simplemente el demandante sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar del traslado de régimen que de la Secretaría de Gobierno del Municipio de la Pintada les enviaron el formulario de traslado para firmar, sin que existiera presencia de algún promotor de DAVIVIR hoy PROTECCIÓN S.A.; y que la afiliación a COLFONDOS se dio de la misma manera sin la presencia de algún asesor.

De lo antepuesto no se deriva que aparezca clara la prueba de un reconocimiento de que los promotores del Fondo privado hubieren informado en detalle las diferencias jurídico-financieras de los sistemas pensionales, con expresión de sus características propias, así como las repercusiones que una decisión de semejante calado podría traerle al afiliado al momento de hacer efectiva la prestación.

Lo anterior permite dar aplicación al artículo 271 de la Ley 100 de 1993 en el sentido de que cuando el empleador o cualquier persona natural o jurídica atente en cualquier forma contra el derecho del trabajador a su afiliación y selección de instituciones del Sistema de Seguridad Social como lo son las AFP, *“La afiliación respectiva quedará sin efecto y podrá realizarse nuevamente en forma libre y espontánea por parte del trabajador”*.

No es de recibo lo relacionado con la imposibilidad en el traslado de régimen con fundamento en el art. 2 de la Ley 797 de 2003, que modificó el art. 13 de la Ley 100 del 1993, tema frente al cual la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, según sentencias como la SL 655 y SL 1022 del 23 de marzo de 2022, ha considerado

que es un despropósito “... centrar el análisis en los períodos definidos en la ley para hacer traslados entre regímenes, o la limitante para realizarlo cuando le falten menos de diez (10) años para alcanzar la edad requerida, puesto que lo pretendido siempre fue la nulidad y/o ineficacia del traslado efectuado a la AFP Porvenir S.A. en el año 1999”.

En consecuencia, en este puntual aspecto se **CONFIRMARÁ** la decisión adoptada en primera instancia.

Conceptos a trasladar

De otro lado, en cuanto a decisión de ordenar también la devolución de las cuotas de administración, seguros previsionales y demás conceptos, tema cuestionado en el recurso de apelación por COLFONDOS S.A., basta con indicar que la Sala ha considerado en múltiples pronunciamientos, que es factible ordenar a la AFP correspondiente, que proceda con la devolución a COLPENSIONES de todas las sumas recibidas con ocasión de la afiliación de cada persona, teniendo en cuenta que no es ello más que una consecuencia natural de la ineficacia del traslado, en tanto el estado de cosas vuelve a su situación anterior, como si el acto nunca hubiera existido.

Criterio que ha adoptado acogiendo lo que en tal sentido ha indicado en reiteradas oportunidades la SCL de la Corte Suprema de Justicia en sentencias como las ya citadas, pero con mayor énfasis en otras como la SL 4964 de 2018 o la SL 2877 del 29 de julio de 2020, rad. 78667, rememorada en las sentencias SL 5595 de 2021 y SL 1637 del 11 de mayo de 2022, en las que dijo expresamente lo siguiente:

*“Entonces, según la norma precedente, el efecto de la declaratoria de ineficacia es retrotraer las cosas al estado en que se hallarían si no hubiese existido el acto o contrato declarado ineficaz, a través de las restituciones mutuas que deban hacer los contratantes, que debe decretar el juez y para lo cual se fijan unas reglas en tal disposición. En otros términos, **la sentencia que en tal sentido se dicte, tiene efectos***

retroactivos y, en virtud de ellos, cada una de las partes debe devolver a la otra lo que recibió con ocasión del negocio jurídico que trasgredió las prescripciones legales, toda vez que este no produce efectos entre ellas y el vínculo que se entendía que había, lo rompió tal providencia.

(...)

En el sub lite, **la devolución de todos los recursos acumulados en la cuenta de ahorro individual en el RAIS debe ser plena y con efectos retroactivos**, porque los mismos serán utilizados para la financiación de la pensión de vejez a que tiene derecho el demandante en el régimen de prima media con prestación definida. **Ello, incluye el reintegro a Colpensiones de los valores que cobraron los fondos privados a título de cuotas de administración y comisiones, incluidos los aportes para garantía de pensión mínima**, pues será aquella entidad la encargada del manejo de esos recursos y del reconocimiento del derecho pensional.”

De otro lado, es necesario tener en cuenta que, en la sentencia ya referida, la SL 2877 del 29 de julio de 2020, rad. 78667, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia fue clara en establecer que la declaratoria de ineficacia de traslado cubija a todas las entidades a las cuales estuvo vinculado el respectivo afiliado “... aun cuando, como es lógico, no todas participaron en el acto de afiliación inicial, porque las consecuencias de tal declaratoria implican dejar sin efectos jurídicos el acto de vinculación a tal régimen...”.

Dijo además en esa providencia, que:

“Por ello, es que todas las cotizaciones efectuadas por el promotor del proceso al sistema general de pensiones, durante su vida laboral, deben entenderse realizadas al de prima media con prestación definida administrado por Colpensiones, tal como asentó el Tribunal. (...)

De modo que, en este caso, la declaratoria de ineficacia del traslado de régimen pensional deben asumirla todas las entidades del régimen de ahorro individual a las que estuvo vinculado el actor, sin importar si tuvieron o no injerencia, o si participaron o no en el cambio de régimen pensional. Y aún en el evento de que Porvenir S.A. y Colfondos S.A. se consideren terceros, le asiste razón al actor en cuanto afirma en su oposición que, en dicha situación, es aplicable el artículo 1748

del Código Civil. En consecuencia, las AFP deben reintegrar los valores que recibieron a título de cuotas de administración y comisiones."

En consecuencia, la decisión deberá ser **CONFIRMADA** en cuanto se le ordenó a cada entidad que proceda con la devolución de los conceptos descontados por cuotas de administración, incluyendo las primas de seguros previsionales de invalidez y sobrevivientes, y el porcentaje destinado a la garantía de pensión mínima, es decir, todas aquellas sumas de dinero recibidas durante el tiempo que el señor JULIO LEÓN VALENCIA HERNÁNDEZ estuvo vinculado a cada entidad.

Se advierte igualmente que la orden tanto a PROTECCIÓN S.A. y a COLFONDOS S.A. de trasladar los conceptos mencionados, es decir, las cuotas de administración, seguros previsionales y aportes destinados al fondo de garantía de pensión mínima deben incluir la respectiva indexación, tal y como fue ordenado en primera instancia, pues así lo ha entendido igualmente la propia jurisprudencia ya citada de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

En ese aspecto, contrario a lo que sostiene la apoderada de COLFONDOS S.A., dicha Corporación sí ha ordenado tal indexación y lo ha hecho en sentencias como las ya citadas, pero de forma más clara en las sentencias SL 3349-2021, SL359-2021 y SL3394-2022, en las que concluyó, entre otras cosas, que uno de los efectos de la declaratoria de la ineficacia de traslado de régimen pensional, es que *"... todas las cotizaciones efectuadas por el promotor del proceso al sistema general de pensiones, durante su vida laboral, deben entenderse realizadas al de Prima Media con Prestación Definida, administrado por Colpensiones, esto es, que mantendrán su poder adquisitivo inicial, por lo que se deben indexar."*

En lo que tiene que ver con la orden del a quo, de reintegrar a COLPENSIONES el bono pensional que se pudiera haberse pagado a favor de la actora, tal decisión resulta desacertada, toda vez que al ser

ineficaz la afiliación del demandante al RAIS, no se origina el derecho a bono pensional, al menos el tipo A, y por tal razón, si el referido bono fue pagado se debe efectuar la devolución al MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, y no a COLPENSIONES, por lo que tal orden será **PRECISADA**.

Conforme a las ordenes anteriores, no se puede pasar por alto las recientes providencias de la Corte Suprema de Justicia como lo son las sentencias SL-843-2022, SL-755-2022 y SL-756-2022, en donde se impone a las AFP privadas la obligación de que junto con las sumas objeto de traslado, se entregue información donde los conceptos trasladados aparezcan discriminados con sus respectivos valores, junto con el detalle pormenorizado de los ciclos, IBC, aportes y demás información relevante que los justifiquen.

Ahora, en lo que tiene que ver con la inconformidad de COLFONDOS S.A. que se condene a la aseguradora a devolver lo descontado a la accionante y girado a dicha entidad por concepto de seguros, no tiene vocación de prosperidad, pues para la Sala es claro que la declaratoria de ineficacia realizada en el presente proceso encuentra sustento es en la falta del cumplimiento del deber de información a cargo de PROTECCIÓN S.A. y COLFONDOS S.A y no la aseguradora, además que la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha sido clara que dichos rubros deben ser asumidos con los propios recursos de las AFP, tal y como se indicó en la SL 1688 de 2019, que dijo expresamente:

“Está probado que la AFP accionada consignó al ISS, hoy Colpensiones, los aportes que la demandante tenía en su cuenta individual con sus rendimientos (f.º 98 a 101), sin embargo, no existe constancia de que hubiese devuelto también los valores correspondientes a gastos de administración, los cuales según se expuso en las sentencias CSJ SL 31989, 9 sep. 2008, CSJ SL4964-2018, CSJ SL4989-2018 y CSJ SL1421-2019, DEBE ASUMIR CON CARGO A SUS PROPIOS RECURSOS.

En tal sentido, se ordenará a la AFP accionada la devolución de esos dineros, debidamente indexados."

En razón de lo anterior si existiera algún tipo de responsabilidad a cargo de la aseguradora que pudiera originar la devolución de los rubros girados a dicha entidad por concepto de las primas de seguro deberá ser discutido en caso tal en otro proceso diferente al interpuesto en esta oportunidad, toda vez que el proceso ordinario laboral no es el escenario propio para discutir asuntos relacionados con la legitimación para celebrar el contrato de seguro y mucho menos si existe o no interés asegurable en los términos argumentados por la parte recurrente.

Así pues, para esta Sala es válido que se exija una claridad en los valores y conceptos a devolver, por lo que se deberá **ADICIONAR** las condenas proferidas a los fondos privados, para ordenarle que, al momento de efectuar el traslado de los diferentes valores a COLPENSIONES, todos los conceptos aparezcan discriminados con sus respectivos valores, junto con el detalle pormenorizado de los ciclos, IBC, aportes y demás información relevante que los justifiquen.

En consecuencia, la sentencia de primera instancia deberá ser **CONFIRMADA, PRECISADA y ADICIONA.**

Las costas procesales de la segunda instancia serán a cargo de COLFONDOS S.A. por no salir adelante el recurso de apelación, y como agencias en derecho se tasan en la suma de \$1'160.000.

Por lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

R E S U E L V E:

CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Once Laboral del Circuito de Medellín, el día 3 de agosto de 2023, pero la **ADICIONA** en el sentido de **ORDENAR** a PROTECCIÓN S.A. y a COLFONDOS S.A. que, al momento de cumplirse la orden de trasladar las sumas recibidas con motivo de la afiliación del demandante, estos conceptos deben aparecer discriminados con sus respectivos valores, junto con el detalle pormenorizado de los ciclos, IBC, aportes y demás información relevante que los justifiquen. Y la **PRECISA** en punto a que en el evento de que se hubiese pagado bono pensional tipo A a favor de la demandante, la devolución del importe de este debe efectuarse al MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, y no a COLPENSIONES. Respecto del importe de bono pensional distinto al tipo A, se confirma que debe ser entregado a COLPENSIONES.

Costas procesales como se dijo en la parte motiva de esta providencia.

Notifíquese por EDICTO.

Firmado Por:

John Jairo Acosta Perez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Jaime Alberto Aristizabal Gomez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Francisco Arango Torres
Magistrado

Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **42786c07cfa39857835137f52b534406e4d71ac3e60dba432a69333f98fe5a82**

Documento generado en 10/11/2023 03:33:05 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>